

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD
Bogotá D.C, Primero (01) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: **Acción de tutela**
Radicación: **2023-00019**

I. ASUNTO:

Dentro de la oportunidad prevista en el artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, procede el Juzgado a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **NOHELIA TIQUE CANACUE** en contra de **la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LA VICTIMAS**, en adelante **UARIV**.

II. ANTECEDENTES:

2.1.- HECHOS (SÍNTESIS):

2.1.1.- Manifiesta el accionante que interpuso derecho de petición de interés particular ante la **UARIV** el día 27 de diciembre de 2022, solicitando fecha de pago de la indemnización por el hecho de victimizante de desplazamiento forzado con resolución de pago No 04102019-1794102- del 21 de septiembre de 2022, sin que hasta la fecha se le haya resuelto la fecha de desembolso de ese hecho victimizante, el cual ya tiene resolución de pago por parte de la entidad accionada.

2.1.2.- Señala que la UARIV no contesta el derecho de petición ni de forma ni de fondo.

2.1.3.- Manifiesta que al no contestar de fondo no solo viola la petición si no que vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y los demás consagrados en la tutela T 025 de 2004.

2.2. PETICIÓN:

Solicita, ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas contestar el derecho de petición de forma y de fondo.

Solicita, ordenar a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas contestar el derecho de petición entregando la resolución donde se reconoce el pago por el hecho victimizante de desplazamiento forzado con resolución de pago No 04102019-1794102- del 21 de septiembre de 2022 y manifestar una fecha cierta de cuándo va a cancelar el porcentaje de la indemnización por víctima resolución de pago No 04102019-1794102- del 21 de septiembre de 2022

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

Mediante auto del 18 de enero de 2023 se admitió la acción constitucional (archivo digital 07), en el que se ordenó notificar a las partes, y solicitarle a la entidad accionada contestar el libelo dentro del término de dos (2) días.

UARIV La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, guardó silencio al requerimiento efectuado por el Juzgado mediante correo electrónico del 18 de enero de 2023 a la hora de las 3:10 (archivo digital No 8).

IV. CONSIDERACIONES:

4.1. COMPETENCIA:

Este Juzgado es competente para conocer de la acción de tutela con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1.991.

4.2.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La acción de tutela se instituyó por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Constitución Política, con la finalidad exclusiva de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas cuando estos sean violados o puestos en peligro por acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, estos últimos, en los casos expresamente señalados por la ley.

Sin embargo, el acceso a este procedimiento preferente y sumario es procedente siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial que sea idóneo, apreciado en concreto, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por lo mismo, no es alternativo sino residual.

Según lo previsto en el numeral 2º del Decreto 306 de 1992 (reglamentario del Decreto 2591 de 1991), dicha acción protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, por ende, no puede emplearse, para hacer respetar derechos que sólo tengan rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.

4.2.1. DE LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

- Legitimación por activa:

El artículo 86 de la Constitución Política dispone el derecho de toda persona de reclamar mediante acción de tutela la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este precepto constitucional se desarrolla en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en el que se consagra que *“la acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra,*

deberá manifestarse en la solicitud”.

En el caso bajo examen, la señora **NOHELIA TIQUE CANACUE** acudió a la acción de tutela para que se protegieran sus derechos fundamentales de petición e igualdad, los cuales afirma están siendo conculcados como consecuencia de la falta de una respuesta fondo por parte de la entidad accionada a su solicitud. Por lo anterior, se encuentra legitimada en la causa por activa para presentar la acción constitucional.

- Legitimación por pasiva

Como quiera que la legitimación pasiva atiende a la capacidad legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales, el inciso primero del artículo 86 Constitucional señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales *“resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”* o por cualquier particular. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que la acción se puede invocar contra una autoridad pública que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental.

En el asunto *sub-judice*, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva de la **UARIV**, a la que se le endilga la presunta actuación que se considera lesiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, y que se relaciona con la omisión de darle una respuesta de fondo a su petición.

- Inmediatez

La Corte Constitucional indicó en la Sentencia SU-961 de 1999 que *“La tutela debe interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser procedente en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros”*.

En el presente asunto, se tiene que, entre la fecha de radicación de la petición por parte del accionante ante la **UARIV**, 27 de diciembre de 2022, y en la que presentó la acción constitucional, 17 de enero de 2023 (archivo digital 05), han transcurrido más de veinte (20) días por lo cual, este Despacho considera que se cumple con este requisito.

- Subsidiariedad

Al respecto, en Sentencia T-422 de abril 26 de 2001 la Corte Constitucional señaló: *“(...) la naturaleza de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86 de la Carta Política y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991, es la de ser un medio de defensa judicial subsidiario y residual que sólo opera cuando no existe otro instrumento de protección judicial, o cuando a pesar de existir, se invoca como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, de manera que no puede utilizarse para remplazar los procesos judiciales o administrativos, pues su finalidad no es otra que brindar a las personas una protección efectiva, real y eficaz, para la garantía de sus derechos*

constitucionales fundamentales. En consecuencia, riñe con la idea de admitirla a procesos administrativos o judiciales en curso o ya terminados, en cuanto unos y otros tienen mecanismos judiciales ordinarios para la protección de derechos de naturaleza constitucional o legal, que por lo tanto la hacen improcedente".

En el presente caso, la parte actora no cuenta con un mecanismo judicial eficaz diverso al que nos ocupa para obtener respuesta de fondo por parte de la entidad accionada a la petición que elevó el 27 de diciembre de 2022, lo que hace viable esta acción.

Establecida entonces la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, se continuará con el examen de los asuntos de fondo.

4.3. ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN:

El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de nuestra Constitución Política y dispone que: *"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (...)"*. En torno a este derecho la Corte Constitucional en la sentencia T-081 de 2007, expresó:

"1. La jurisprudencia constitucional ha señalado que el núcleo esencial del derecho de petición comprende los siguientes elementos o características:

(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;

(ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico;

(iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados; es decir, que haya correspondencia entre la petición y la respuesta, sin fórmulas evasivas o elusivas;

(iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable".

En el mismo sentido, la Sentencia T-957 de 2004 indicó que la respuesta a los derechos de petición debe ser de fondo, pues:

"la Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas oportunidades sobre el contenido y el alcance generales del derecho de petición, en virtud del cual toda persona puede presentar peticiones respetuosas ante las autoridades, y obtener una pronta resolución. Según se ha precisado en la doctrina constitucional, esta garantía constitucional "consiste no sólo en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino a que éstas resuelvan de fondo, de manera clara y precisa la petición presentada". Asimismo, tal respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible,

“pues prolongar en exceso la decisión de la solicitud, implica una violación de la Constitución”

A su vez, la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 1755 de 2015, en su artículo 13 prescribe que: “(...) Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. (...)”.

Conforme a lo expresado, las respuestas emitidas por las autoridades en atención a las peticiones elevadas por los particulares deben ser oportunas, prontas y de fondo, es decir, que resuelvan en forma completa y total las solicitudes presentadas, en forma clara, precisa y congruente con la solicitud. Adicional a lo anterior, la petición debe ser puesta en conocimiento del solicitante, toda vez que lo contrario tornaría ineficaz el derecho de petición que, se reitera, es de rango constitucional.

V. CASO EN CONCRETO:

5.1.- El problema jurídico a desatar consiste en determinar si la **UARIV** vulneró los derechos fundamentales de petición e igualdad de la señora **NOHELIA TIQUE CANACUE** respecto de la solicitud que radicó el día 27 de diciembre de 2022.

5.2.- Se encuentra incorporada al expediente la petición elevada por la accionante ante la **UARIV** el día 04 de noviembre de 2022 bajo el radicado No **2022- 8547644-2**, solicitando:

“(…)

años para cancelar esta indemnización. Pero esto es lo que dice la norma a nivel general. Pero sin un pronunciamiento del tiempo en el que van a cancelar la INDEMNIZACIÓN en mi caso en particular para yo tener una fecha cierta de CUANDO me van a cancelar este monto.

PETICIÓN.

Por lo anterior solicito de la manera más respetuosa, a la persona encargada.

De acuerdo a lo anterior en mi caso en particular CUANTO Y CUANDO y que criterios tuvo en cuenta para este monto que me van a otorgar por concepto de indemnización “.... Se manifiesta que Se reconocerá como indemnización por vía administrativa para el hecho victimizante de desplazamiento forzado, un monto de hasta 17 salarios mínimos”

De acuerdo a esta respuesta cuando se va a otorgar esta indemnización en dinero “.... La indemnización por vía administrativa para las víctimas de desplazamiento forzado se entregará: (1) por núcleo familiar, (2) en dinero, (3) a través de un monto adicional”

De acuerdo a mi proceso. Que documentos me hacen falta para esta indemnización.

SE expida ACTO ADMINISTRATIVO que resuelva si accede o no al reconocimiento de la indemnización por vía administrativa.

Se expida la CERTIFICACIÓN DE VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Del orden constitucional
Art. 23 Derecho de Petición.
Art. 5 del C.C.A.
Y subsiguientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

Del orden constitucional.
Art. 23 Derecho de Petición.
Art. 5 del C.C.A.
Y subsiguientes.

NOTIFICACION.

Del accionante NOHELIA TIQUE CANACUE, En la calle 34 a No. 41-09 este ciudadela sucre Soacha Cundinamarca Cel. 3203004075 yamiletapiero2015@gmail.com

De la persona encargada, atentamente.

Noelia Tique
NOHELIA TIQUE CANACUE.

UARIV

2022-8547644-2

Fecha Rad: 2022-12-27 15:34:52 Us: Andres Catalina V.

Proceso: GRUPO DE SERVICIO AL CIUDADANO

(Página 4, archivo digital 03)

Así las cosas, es dable presumir la veracidad de lo narrado por el actor, en relación a que la convocada, no le ha contestado de fondo.

De tal manera, se concluye que, ante la falta de contestación de la UARIV, se

hace necesario otorgar el amparo deprecado. Por tanto, se concederá el amparo al derecho ordenando que en un plazo no superior a dos (02) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, se le resuelva el derecho de petición, fechado 27 de diciembre de 2022.

En mérito de lo expuesto, EL JUEZ NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley",

VI. RESUELVE:

PRIMERO: TUTELAR EL DERECHO DE PETICIÓN a la señora **NOHELIA TIQUE CANACUE**, el cual le fue vulnerado por LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS, por las razones anotadas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: OFICIAR a la entidad demandada para que dentro del término de DOS (02) días de respuesta a la demandante sobre la petición de fecha 27 de diciembre de 2022.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a los intervinientes, a través del medio más expedito. **SECRETARÍA PROCEDA DE CONFORMIDAD.**

CUARTO: Si no fuere impugnada la decisión, envíese a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and horizontal strokes, positioned above the printed name of the judge.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ